

Santiago, 11 de marzo de 1987

Monseñor  
Carlos Camus Larenas  
Obispo de Linares

Estimado señor Obispo:

La Dirección del Partido Socialista de Chile me ha encomendado que me dirija a Ud. para manifestarle su reconocimiento por la honesta, descarnada y valerosa denuncia que a través de su carta "Camino al suicidio" y de las declaraciones a "El Mercurio" del domingo pasado Ud. hace de la situación social, política y moral por la que atraviesa el país en la extremadamente crítica coyuntura actual.

Estoy convencido que la mayoría del pueblo chileno comparte sus apreciaciones, con las que nos complacen comprobar que en general coincidimos.

Compartimos la valoración moral que hace del régimen dictatorial que nos gobierna y que ha ido quedando de manifiesto desde el momento mismo de su instalación en el poder. La apelación masiva al recurso de la violencia represiva más brutal, contra los partidarios del régimen constitucional depuesto y contra los disidentes; el incumplimiento de las promesas al pueblo y los trabajadores de restituir la democracia y respetar las conquistas logradas, después de decenas de años de dolorosas luchas; la fraudulenta restitución de la instauración nazi autoritaria y de la elección presidencial; el atropello persistente a los derechos humanos; la política social y económica de intolerable injusticia y explotación, conscientemente diseñada para proteger el patrimonio transnacional y el de sus aliados criollos, y la involucración en incidentes de la mayor violencia y crueldad cuya responsabilidad han eludido recurriendo a retorcidos procedimientos que a nadie engañan, son actuaciones que revelan su inmensa inmoralidad. Sería imposible y no es nuestro propósito, ser exhaustivos en la cita de conductas política y moralmente inaceptables, pero no puedo omitir la que a nuestro juicio marca todo el curso y el destino de la dictadura militar: la sediciosa rebelión de las Fuerzas Armadas al poder político legítimo, generado en la auténtica soberanía del pueblo, la traición de ellas a sus propios principios institucionales y la aceptación de la doctrina imperialista de la Seguridad Nacional que avala la guerra interna declarada por Pinochet.

Nuestro Partido ha condenado la violencia institucionalizada y represiva, y su expresión más repudiable, el terrorismo de Estado. Hemos reivindicado el derecho del pueblo a defenderse y a luchar activamente en contra de la dictadura. El derecho a la rebelión del pueblo ha sido reiteradamente reconocido por la Iglesia y últimamente la Congregación para la Doctrina de la Fe reactualiza todo su significado al declarar que "la lucha armada es indicada como último recurso para poner fin a una tiranía evidente y prolongada que atenta gravemente a los derechos fundamentales de la persona y perjudica peligrosamente al bien común del país". Política y éticamente no es objetable la lucha que propiciamos, que tiene carácter político y que descansa en la fuerza de las masas conscientes y organizadas y que conduce a la ingobernabilidad y a la sustitución de la dictadura por la democracia.

Dentro de este marco conceptual muchas expresiones de violencia subversiva no pueden ser objetadas políticamente ni tampoco condenadas éticamente. Coincidimos en que en un contexto como el descrito y en el que el régimen ha expresado que está en guerra con el marxismo y que en Chile hay que distinguir entre humanos y humanoides, a los que hay que combatir sin contemplaciones, y que hay que exterminar al marxismo -lo que sólo puede entenderse como el exterminio de los marxistas ya que las ideas no se exterminan-, la violencia en contra del gobierno cualquiera que sea la forma que adopte no puede ser calificada moral y políticamente como lo ha hecho el régimen y la justicia que manipula, y puede ser comprendida y juzgada en su verdadero carácter.

Coincido también básicamente con su juicio sobre el asunto de los arsenales y además descalifico la grotesca opinión de los asesores militares del imperialismo que "técnicamente" habrían establecido que estaban destinados a un alzamiento armado posterior a la dictadura actual.

Deseo también expresarle nuestra solidaridad frente a los ataques verbales que desde el gobierno y otras trincheras políticas lo han afectado, que dicen relación principalmente con los aspectos éticos y políticos a los que me he referido, por su carácter insolente y abiertamente demagógico y porque revelan el intento explícito o encubierto de crear conflicto en el propio seno de la Iglesia y descalificar a quienes se manifiestan disidentes ante el régimen.

No puedo dejar de referirme concretamente a algunas opiniones del gobierno a través de sus voceros más calificados, porque pretenden confundir a la opinión pública, descalificarlo a Ud. moralmente y responsabilizarlo de deteriorar el clima para la visita del Papa. Nos referimos a la calificación de "apologista de la violencia" que le hace el Sr. Ministro de Justicia en una abiertamente maliciosa interpretación de su pensamiento, que explícitamente está desmentida en el texto de sus declaraciones a El Mercurio y a las que él se refiere. Para nosotros este tipo de juicios políticos nos son de sobra conocidos porque nos han afectado permanentemente, como si de tanto falsear la realidad la mentira se convirtiera en verdad.

También se le critica acervamente su incredulidad del régimen, expresada públicamente, lo que constituiría un irresponsable agravio al gobierno y a sus prisioneros. La incredulidad se la ha conseguido aquel, a través de más de 13 años de engaño sistemático al país y sin duda es compartida por la totalidad de los demócratas, lo que sería fácil de demostrar recurriendo a la expresión de la soberanía popular a la brevedad que las circunstancias exigen.

Repudiamos en la forma más enérgica la acusación de maquiavélica deshonestidad que se le atribuye invariablemente a su proceder, al condenar con energía y crudeza determinados comportamientos.

El Sr. Rosende también pretende inculparlo de romper hiriente y cruelmente el símbolo de la visita Papal y de interrumpir el recogimiento y la concordia con que debemos recibirla. Nos parecen totalmente antojadizas esas apreciaciones que no se sustentan en lo que Ud. ha declarado, sino sólo en la perturbada conciencia del Sr. Ministro que se advierte, por lo demás, a lo largo de su lamentable declaración.

A este propósito permítame una reflexión que creo pertinente. Pienso que la visita del Papa no debe llevarse a cabo en un clima artificial. No debemos esconderle la realidad que es crítica y conflictiva, bajo un manto de paz y

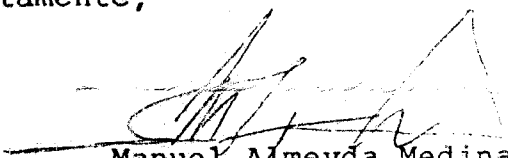
de concordia ficticias. No creo que el Papa espere y desee otra cosa que visitar al país real y a su pueblo con sus miserias y anhelos auténticos, para entenderlo y entregarle su mensaje. Si eso es así, nada puede ser más oportuno que las declaraciones suyas de ayer y de hoy, porque revelan claramente la profundidad de los conflictos y disensos entre los chilenos. No puede sino pensar que sólo calando profundamente en las diferencias se puede establecer la verdad y dar paso a la justicia.

El Papa debe vivir su experiencia en Chile con su pueblo y sus problemas, conocer su verdad por amarga que sea y reclamar que se le haga justicia para que lográndola se haga eficaz su mensaje de vida y su llamado de paz y reconciliación.

Estimado Monseñor:

En estos momentos en que Ud. y su familia son objeto directo de la represión de parte del gobierno y de la violencia que estimula en anónimos y peligrosos "colaboradores", quiero manifestarle que estamos junto a Ud. y que también compartimos su opinión de que a través de esos ataques de que es víctima Ud. hoy, como antes lo ha sido la Vicaría de la Solidaridad, no se pretende otra cosa que descalificar a la Iglesia Chilena en su conjunto para ser auténtica conductora espiritual de los cristianos y fiel y valerosa intérprete y defensora de los derechos y aspiraciones de nuestro sufrido pueblo.

Atentamente,



Manuel Aimeyda Medina  
Subsecretario General  
Partido Socialista de Chile